

## 1. Clara Aldrighi\*

Palabras clave: Uruguay, Estados Unidos, Contrainsurgencia.

### *Estados Unidos y el 1968 uruguayo. Armas, adiestramiento y recursos financieros para sofocar la protesta social*

#### ABSTRACT

**L**a represión desatada por el gobierno de Jorge Pacheco contra los movimientos sindical y estudiantil no hubiera podido desplegarse con tan intensa violencia si no hubiera contado con el apoyo estadounidense. En el transcurso de la campaña represiva de 1968, instructores del Programa de Seguridad Pública dependiente de la USAID, orientaron, capacitaron y pertrecharon a la Policía, supervisaron las operaciones de las Guardias Metropolitana y Republicana y de los departamentos policiales de Investigaciones, Inteligencia y Seguridad, en contacto permanente con los ministerios de Interior y Defensa.

\*\*\*

**T**he repression unleashed by the government of Jorge Pacheco against the trade union and student movements could not have been deployed with such intense violence had it not been for the American support. In the course of the repressive campaign of 1968, instructors of the Public Security Program under the USAID, guided, trained and equipped the Police, supervised the operations of the Metropolitan and Republican Guards and the police departments of Investigations, Intelligence and Security, in permanent contact with the Ministries of Interior and Defense.

*Key Words: Uruguay - United States - counterinsurgency*

\*\*\*

#### Introducción

Ocho años antes del golpe de Estado de 1973 llegó a Uruguay un equipo de funcionarios estadounidenses con una misión específica: transformar a la Policía en la “primera línea de defensa” contra el comunismo y la subversión. Desde comienzos de los años sesenta, los analistas del Departamento de

---

\* Universidad de la República, Instituto de Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,

Montevideo, Uruguay, [clara.aldrighi@gmail.com](mailto:clara.aldrighi@gmail.com) Una versión preliminar de este trabajo fue publicada en *Semanario Brecha*, Montevideo, 10/8/2018, págs.20-23.

Estado y la CIA especializados en Uruguay preveían el advenimiento de una grave crisis económica, con sus secuelas sociales y políticas, cuyos resultados aparecían peligrosamente inciertos para los intereses de Estados Unidos.<sup>1</sup> Aunque este diagnóstico era prematuro, Estados Unidos presionó a los gobernantes uruguayos para que aceptaran el establecimiento de un programa de asistencia policial. En 1965 llegaron a Montevideo los primeros instructores del Programa de Seguridad Pública (PSP), dependiente de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), por un acuerdo estipulado entre el Departamento de Estado y el gobierno uruguayo. Sus actividades cesaron nueve años después, en 1974, cuando el Congreso resolvió que el programa fuera clausurado definitivamente en todo el mundo.<sup>2</sup>

Los instructores del PSP se proponían modernizar a la Policía uruguaya en varios años de sostenido trabajo, disponiendo para ello de cuantiosos recursos otorgados por la AID. ¿Modernizarla en qué sentido, con

cuáles objetivos? Más allá del documento suscrito por los dos gobiernos, necesariamente convencional pues debía ser sometido al control de los respectivos parlamentos, los verdaderos objetivos se detallaban en los informes que la embajada de Estados Unidos y los instructores policiales enviaban periódicamente a Washington. El PSP era fundamentalmente un programa de contrainsurgencia. En el concepto de insurgencia sus responsables incluían no solamente la actividad de los movimientos guerrilleros sino las movilizaciones sociales masivas -huelgas, manifestaciones, ocupaciones y otras modalidades de protesta social-, en especial aquéllas que por su intensidad y apoyo multitudinario ponían en riesgo la estabilidad de los gobiernos aliados de Estados Unidos.

Al igual que en otros países del llamado Tercer Mundo, el PSP no potenció las capacidades de la Policía uruguaya para combatir la criminalidad y el delito común: antes bien, la preparó para neutralizar la

<sup>1</sup> Los funcionarios de la AID establecidos en Uruguay observaban en 1965 que “El creciente deterioro de la situación económica es favorable a la creación de un grave y creciente descontento y de una insatisfacción pública, que favorecerán movimientos de cambio violento y subversión, si bien no existe en la actualidad una activa amenaza de insurgencia [...]. Sin embargo, el partido Comunista permanece como la mayor amenaza para la seguridad interna y las instituciones establecidas en el largo plazo. Aunque pequeño en número, está bien organizado y explota su condición legal, promoviendo huelgas, manifestaciones y disturbios”. AID Montevideo a AID Washington, “Public Safety Review”, 30/6/1965, en National Archives and Records Administration, College Park, MD (en adelante NARA), Records of the Agency for International Development, Record Group (RG) 286, Office of Public Safety, Latin American Branch, Country Files, Uruguay (en adelante OPS), box 109. Compartía esta visión el núcleo de la CIA instalado en Uruguay, véase Philip Agee. *Diario de la CIA. La*

*Compañía por dentro*; Barcelona, Bruguera, 1979, páginas 387, 396 y 433.

<sup>2</sup> A comienzos de los años setenta la prensa de Estados Unidos difundió las declaraciones de funcionarios de la OPS y del ejército norteamericano sobre torturas y ejecuciones en Vietnam, en las que se hallaban involucrados instructores del PSP. A mediados de 1973 el Congreso envió un equipo de estudio a República Dominicana y Guatemala. Sus conclusiones fueron que el PSP “Constituía un grave riesgo político para Estados Unidos, porque a través del mismo se había llegado a identificar a Washington con el terrorismo policial en estos países”. En diciembre de 1973 el Congreso votó la prohibición de todos los programas de Seguridad Pública en el extranjero. A fines de 1974, ante nuevas denuncias de abusos, votó la prohibición general del PSP y del adiestramiento en la Academia Internacional de Policía (IPA). Michael Klare y Nancy Stein. *Armas y poder en América Latina*; México, Era, 1978, página 173.

presunta amenaza comunista. Por consiguiente, la transformó en un relevante instrumento político. Poco después el Programa de Asistencia Militar (MAP) cumplió una función análoga con las Fuerzas Armadas.

En un lapso de aproximadamente seis años los estadounidenses reorganizaron completamente a la Policía y la capacitaron para la represión de los movimientos sociales y guerrilleros. En 1971, cuando el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros alcanzó su mayor expansión y la izquierda se unificó en un frente electoral, el énfasis y los recursos fueron desplazados hacia las Fuerzas Armadas.

Entre 1965 y 1974 actuaron en Uruguay cuatro equipos del PSP. Sus jefes fueron Adolph Saenz (enero de 1965 a julio de 1969), Dan A Mitrione (julio de 1969 a julio de 1970), Richard Martinez (agosto a septiembre de 1970), Roy Driggers (octubre de 1970 a junio de 1972) y Charles Guzman (junio de 1972 a junio de 1974). Los consejeros a sus órdenes fueron sucesivamente Cesar Bernal, Ronald Holko, William Cantrell, Julian Lindenauer, Lee Echols, Richard Biava, Richard Martinez, Jose Hinojosa y Jorge Matos.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Datos obtenidos en los informes mensuales AID Montevideo a AID Washington, en NARA, RG286, OPS, Uruguay. Se consignan los períodos de ejercicio efectivo de los instructores policiales en Uruguay.

<sup>4</sup> Cifras tomadas de AID Montevideo, "Uruguayan Police Force Survey", 27/1/1966; AID Montevideo, "Project Data Uruguay FY1972 Public Safety Project"; AID Montevideo, "Uruguay Security Forces Casualty Report FY1972", 9/5/1973 en NARA, RG286, OPS, box 109, box 112.

La fuerza policial uruguaya a la que deberían modernizar alcanzaba en 1966 los 6.064 efectivos en Montevideo y 8.971 en el interior. En 1972 ascendía en total a 20.650 hombres. Fuerzas Armadas y Policía sumaban 47.650 efectivos. En Montevideo, para una población de 1.430.000 habitantes, había 10.150 efectivos policiales y 11.000 militares; en el interior, con 1.490.000 habitantes, los policías eran 10.500 y los militares 16.000. Uruguay se encaminaba a la dictadura con un crecimiento extraordinario de sus cuerpos armados. La relación en todo el país era de un policía o militar cada 61 habitantes.<sup>4</sup>

### **Crisis económica y autoritarismo presidencial**

Desde mediados de la década de 1950, Uruguay experimentó crecientes dificultades económicas, derivadas fundamentalmente del estancamiento de los sectores primario y secundario, que redundó en una drástica disminución de la producción exportable. La insuficiencia de la producción agropecuaria, en especial ganadera, fue el principal factor de la decadencia económica.<sup>5</sup> A todo esto se sumaron las dificultades experimentadas

<sup>5</sup> Han sido señaladas como principales causas del estancamiento productivo la gran desigualdad en la distribución de la tierra y la carencia de renovación tecnológica en la producción agropecuaria. Con una estructura productiva basada en la actividad primaria y especialmente en la ganadería extensiva, el principal rubro de las exportaciones nacionales era la carne vacuna. A fines de los años cincuenta el 87% de las tierras productivas del país se dedicaban al pastoreo. En 1970 el 5% de los establecimientos rurales ocupaba el 58% de la superficie de las tierras registradas. En el

por la industria manufacturera, cuyo crecimiento se detuvo casi completamente a partir de 1957. En la década siguiente el país debió enfrentar un progresivo déficit comercial, la aceleración del proceso inflacionario, la reducción de las inversiones en actividades productivas, la disminución de las reservas en oro y divisas, y el incremento del endeudamiento externo.

La declinación progresiva del ingreso per cápita intensificó la competición entre los grupos sociales para mantener el nivel de sus ingresos reales. Estas condiciones favorecieron el fortalecimiento del movimiento sindical; en 1966 se produjo su unificación en la Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

En noviembre de 1966 un plebiscito constitucional reemplazó el régimen presidencial colegiado por la presidencia unipersonal, instaurando una fuerte concentración de poderes en el Ejecutivo. En diciembre de 1967 la muerte del presidente Oscar Gestido llevó al gobierno a su compañero de fórmula Jorge Pacheco, figura menor del partido Colorado, ex diputado y ex periodista que de pronto, por azar, se convirtió en presidente.

La embajada de Estados Unidos apreciaba a Pacheco y le consideraba un buen amigo de su país. En 1962, al ser electo diputado en la lista encabezada por Gestido, Pacheco debió renunciar a la dirección del periódico *El Día*, vocero de la Lista 14. La embajada escribió

al Departamento de Estado que a partir de entonces, aunque “ejercería una menor participación activa en la orientación del periódico”, Pacheco permanecería en su equipo directivo y su relativo alejamiento no provocaría cambios sustanciales en la línea editorial, puesto que *El Día* era “uno de los más entusiastas sostenedores de Estados Unidos. Ha adoptado los puntos de vista de Estados Unidos en asuntos como el desarme, las pruebas nucleares y Cuba”.<sup>6</sup>

Cuatro días después de asumir la presidencia, el 11 de diciembre de 1967, Pacheco recibió la visita del embajador de Estados Unidos Henry A. Hoyt. Luego de considerar varios asuntos políticos, el diplomático lo puso al tanto de “nuestra estrecha coordinación con el ministro del Interior y el jefe de Policía sobre varias materias”. En el cable enviado a Washington informando el contenido de la conversación, Hoyt expresó su opinión sobre el nuevo mandatario:

“Es un hombre firme en sus convicciones, ubicado rotundamente del lado de Occidente. Dijo que la cooperación de Estados Unidos es bienvenida y necesaria. Refiriéndose a nuestra personal amistad de muchos años, dijo que la apreciaba y la consideraba valiosa, particularmente en estos momentos. Tengo una vez más la impresión de que mucha gente va a quedar sorprendida por las capacidades de

---

extremo opuesto, el 73% de los establecimientos rurales no llegaba al 8% de dicha superficie. Danilo Astori. *Tendencias recientes de la economía uruguaya*; Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria-CIEDUR, 1981, páginas 22-46; Henry Finch. *Historia*

*económica del Uruguay contemporáneo*; Montevideo, Banda Oriental, 1980, páginas 35-58.

<sup>6</sup> Embajada de EEUU a Departamento de Estado, *Joint Weeka N°49*, Montevideo, 7/12/1962. (Documento obtenido por Jorge Bañales al amparo de la FOIA).

Pacheco, por su firmeza y determinación”.<sup>7</sup>

Inspirado por las cercanas dictaduras de Brasil y Argentina, Pacheco reveló muy pronto sus inclinaciones autoritarias. Su primera iniciativa de gobierno fue la clausura de dos periódicos y la ilegalización de siete grupos políticos de izquierda –el partido Socialista, la Federación Anarquista Uruguaya y otros grupos menores– por “delitos de opinión”. Hoyt consideró que “la medida indiscutiblemente firme tomada por el nuevo presidente en un momento tan inicial de su administración es un signo alentador e indica que Pacheco es un hombre de acción y de convicciones firmes”. Sin duda representaba un progreso frente a la excesiva tolerancia de la clase política uruguaya hacia las “actividades extremistas”. Esperaba que fuera el arranque de una más dura actitud del gobierno en relación al comunismo y también, posiblemente, a la agitación sindical. “Si esto ocurriera se cumpliría el

más importante objetivo planteado por la embajada en su último CASP”.<sup>8</sup>

Para poner en práctica las severas medidas de estabilización económica exigidas por el Fondo Monetario Internacional<sup>9</sup> y neutralizar la protesta social, Pacheco recurrió en forma casi permanente a las llamadas “medidas prontas de seguridad” (MPS), un mecanismo similar al estado de sitio de otras legislaciones. La Constitución asigna a la Asamblea General legislativa la potestad de controlar la aplicación de las MPS e incluso la de dejarlas sin efecto. Durante el gobierno de Pacheco el Parlamento en varias oportunidades las levantó, pero el Ejecutivo volvió a implantarlas, extralimitándose en sus facultades y desdeñando la voluntad parlamentaria.

Las MPS fueron empleadas por Pacheco en 1968 y en los años sucesivos para suspender las libertades fundamentales y responder a las exigencias populares con el uso de la

<sup>7</sup> Embajada de EEUU a Secretario de Estado, Montevideo 1340, 12/12/1967, en NARA, General Records of the Department of State (en adelante RG59), Central Foreign Policy Files 1967-1969, Political and Defense (en adelante CFPP, PD 1967-1969), box 2581. El embajador Hoyt falleció repentinamente en Montevideo el 16/12/1967.

<sup>8</sup> Las ilegalizaciones y clausuras fueron decretadas el 12/12/1967. El motivo aducido fue el apoyo que manifestaron a las resoluciones aprobadas en la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), reunida en La Habana en julio-agosto de 1967. El comentario de Hoyt en Embajada de EEUU a Departamento de Estado, “Decree Banning Ultra-Leftist Publications and Groups”, Montevideo A-345, 15/12/1967, en NARA, RG59, CFPP, PD 1967-1969, box 2581. Los CASP (Country Analysis and Strategy Paper) eran análisis de coyuntura y proyectos anuales de trabajo elaborados en conjunto por los funcionarios de las agencias gubernamentales adscriptos a cada embajada de EEUU.

<sup>9</sup> En 1959 Uruguay había firmado su primera carta de intención con el FMI. En febrero de 1968 una misión refinanciadora guiada por el ministro de Hacienda César Charlone logró estipular un nuevo acuerdo con el Fondo. A cambio de la aplicación de precisas medidas económicas obtuvo otro empréstito y moratorias para el pago de las obligaciones de la deuda externa. Si bien Pacheco al implementar esta orientación económica logró algunos éxitos (contención de la inflación y las actividades especulativas, crecimiento económico del 5% en los dos años siguientes), a partir de 1971 la inflación retomó un ritmo acelerado, se produjo una nueva caída de las exportaciones, se detuvo el crecimiento y se acentuó el déficit fiscal. En 1971 la deuda externa presentaba un incremento del 41% en relación a la existente en 1968. Benjamín Nahum, Ana Frega, Mónica Maronna, Yvette Trochon. *El fin del Uruguay liberal 1959-1973*; Montevideo, Banda Oriental, 1994, páginas 117-136. Henry Finch. *Historia económica...*, Op Cit., páginas 48-51. Danilo Astori, *Tendencias...*, Op. Cit., páginas 11- 46.

fuerza. Durante los cuatro años de su presidencia se volvieron habituales los ataques a la independencia del Poder Judicial y a la autonomía de la enseñanza. En el marco de las MPS se procedió a efectuar detenciones arbitrarias de manifestantes y trabajadores por ejercer el derecho de huelga. La libertad de prensa también fue vulnerada mediante la censura o clausura de radios y periódicos por expresar sus críticas a la política gubernamental. Miles de trabajadores públicos y privados fueron militarizados, se impulsó la represión violenta de las manifestaciones provocando numerosos heridos y cinco estudiantes muertos.<sup>10</sup> Se intensificó la tortura policial a los presos políticos.<sup>11</sup> En 1971 se inició la práctica del asesinato y desaparición de miembros de organizaciones guerrilleras por grupos parapoliciales.<sup>12</sup>

Aunque manteniendo formalmente sus funciones, las mayorías parlamentarias renunciaron al control del Poder Ejecutivo por la vía de la omisión. La aplicación de la legislación de emergencia, por ejemplo, podía haber sido suspendida. Entre junio de 1968 y marzo de 1969, la Asamblea General fue citada 83 veces sin lograr *quorum* para

sesionar. Con esta actitud, dictada no por la irresponsabilidad sino por un cálculo preciso, los ausentes apoyaban tácitamente la política del Poder Ejecutivo. Es que en la implementación de su política económica como en la ofensiva desplegada contra los movimientos sociales, Pacheco contó con el sostén de las derechas parlamentarias, tanto del partido Colorado (que conformará el “pachequismo”) como del Nacional o Blanco (en especial de la Alianza Herrero-Ruralista, cuya figura más destacada era el senador Martín Echegoyen). El sector colorado liderado por Jorge Batlle (Unidad y Reformalista 15) brindó sustancialmente su apoyo al gobierno, alineándose con la derecha política.<sup>13</sup>

Durante su mandato, Pacheco se fue apartando parcial o totalmente de la política impulsada por los precedentes gobiernos del sector batllista de su partido, caracterizada por la intervención del Estado en la economía, la nacionalización de importantes servicios públicos, la promoción de una industria sustitutiva de importaciones, la instauración de mecanismos de redistribución progresiva del ingreso, la solución de los conflictos entre las partes

<sup>10</sup> En 1971 murieron baleados por la Policía los estudiantes Heber Nieto y Julio Sposito.

<sup>11</sup> Véase el “Informe final de la Comisión investigadora del Senado sobre violaciones de los derechos humanos y comisión de actos de torturas a detenidos y regímenes de detención vejatorios de la dignidad humana” en *Cuadernos de Marcha N°44*, “Torturas”. Montevideo, diciembre de 1970, págs.29-74. La Comisión parlamentaria fue instituida en diciembre de 1969.

<sup>12</sup> El “escuadrón de la muerte”, integrado por policías, militares y civiles vinculados a los servicios de Inteligencia, en 1971 secuestró y ultimó a tres guerrilleros. Dos permanecen desaparecidos. Véase el dictamen judicial en el proceso a los miembros del escuadrón, Montevideo, 7 /11/ 2009, reproducido en Observatorio Luz Ibarburu,

<https://www.observatorioluzibaburu.org/media/uploads/2267682005.pdf>. (Consultado el 15 de agosto de 2019).

<sup>13</sup> Un informe de la embajada de EEUU señalaba en mayo de 1968 que Jorge Batlle, después de una fuerte oposición a las políticas del presidente Gestido, había estrechado sus vínculos con Pacheco. El diputado de la Lista 15 Julio María Sanguinetti les comunicó, además, que su sector “estaba firmemente comprometido con el presidente y en especial con su política económica, en cuya elaboración la Lista 15 había participado en forma sustancial”. Embajada de EEUU a Departamento de Estado, “Cabinet crisis”, Montevideo 2506, 11/5/1968, NARA, General Records of the Department of State (en adelante RG59), Central Foreign Policy Files 1967-1969, Political and Defense (en adelante CFPF, PD, 1967-1969), box 2581.

sociales mediante el diálogo y la negociación, el fortalecimiento de la educación pública y los avances en la legislación social y laboral.

En palabras del senador del partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, el gobierno de Pacheco se caracterizó:

“Por su empecinado afán de humillar al Poder Legislativo, de desatender todos sus mandatos, de violar la ley, de mostrarse, de exhibirse, vanidosa, orgullosamente, en actitudes de irrespetuosidad frente a los órganos que representaban la soberanía popular, haciendo a veces deliberadamente, en forma ilegal, lo que también se hubiera podido lograr de manera lícita. Era un afán de humillación dirigido también al Poder Judicial, al cual se le escarneció deliberadamente, a todos los niveles, desacatando aun las órdenes de los magistrados en materias civiles, ajenas a la órbita de la seguridad nacional. Hasta para los desalojos, se ponía a la Policía, sustituyendo la decisión de los magistrados”.<sup>14</sup>

## La eclosión de las luchas sociales

En 1967 el movimiento sindical se movilizó intensamente reclamando aumentos salariales acordes con la aceleración del proceso inflacionario. Sus demandas arreciaron con la llegada del nuevo año. Miles de trabajadores organizados en la CNT manifestaron preocupación por sus condiciones de vida y trabajo. Pedían ante todo la adecuación de los salarios al encarecimiento del costo de vida.<sup>15</sup> Desde el mes de enero de 1968 se sucedieron las manifestaciones callejeras, marchas y ocupaciones en Montevideo e interior del país.<sup>16</sup>

Los estudiantes liceales iniciaron sus luchas en el mes de marzo protestando por el anunciado aumento de precio del boleto de transporte público. Al poco tiempo se les sumaron los estudiantes de la Universidad del Trabajo y de Magisterio. Numerosos centros de estudio fueron ocupados para reclamar cursos nocturnos, becas, comedores estudiantiles y en especial, el pago de las deudas presupuestales que mantenía el gobierno con la educación secundaria. Los gremios docentes apoyaron estas demandas y realizaron sus propios paros y movilizaciones. El estudiantado universitario nucleado en la FEUU se incorporó a las luchas reivindicativas recién

<sup>14</sup> Wilson Ferreira Aldunate, intervención en el Senado, 8/8/1972, en Wilson Ferreira Aldunate. *Estadista y parlamentario, Tomo 2, Parte 2ª*; Montevideo, Cámara de Senadores, 1995, páginas 713-714.

<sup>15</sup> Tomando como base 100 el promedio anual de salarios de 1957, en 1967 el promedio anual del salario real se encontraba en 86,0 y en 1968 (asalariados públicos y privados) en 73,2. En 1968 los precios al consumo aumentaron un 128%. Hugo Cores. *El 68 uruguayo*;

Montevideo, Banda Oriental, 1997, página 13. Henry Finch, *Historia económica...*, Op Cit., página 149.

<sup>16</sup> Entre enero y marzo de 1968 las luchas sindicales involucraron a trabajadores madereros, textiles, de supermercados, construcción, sanatorios, vestimenta, laboratorios, transporte, metalurgia, frigoríficos, entes autónomos del Estado, remolacheros, cañeros, tamberos y otros sectores laborales. Jorge Landinelli. *1968, la revuelta estudiantil*; Montevideo, Universidad de la República-Banda Oriental, 1988, pág. 103, n.14 y 15.

en junio; a partir de entonces su presencia en las manifestaciones callejeras se volvió masiva.<sup>17</sup>

La respuesta del gobierno fue la represión policial, la dispersión de concentraciones obreras y estudiantiles con gases lacrimógenos, los apaleos con cachiporras y sables, pero también, hecho inédito en Uruguay, los disparos con armas de fuego. El 6 de junio se tuvieron los primeros cinco estudiantes heridos de bala por la Policía. En los meses siguientes se contaron por decenas los heridos por perdigones y balas o por la explosión cercana de granadas lacrimógenas. En agosto murió el primer estudiante, Líber Arce, baleado en una manifestación callejera. En septiembre, en el transcurso de otra manifestación, murieron los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos.

La movilización estudiantil a partir de marzo de 1968 desbordó los cauces pacíficos y aplicó formas violentas de protesta, que se intensificaron a partir de la represión del 6 de junio. Las modalidades violentas consistían en lanzamientos de piedras contra policías y de botellas incendiarias (*molotov*) o llenas de alquitrán contra sedes de organismos públicos, medios de prensa, comercios y empresas, interrupción del tránsito con barricadas, quema de neumáticos e incendio de vehículos.

El tipo de manifestación que estudiantes y trabajadores llamaban “relámpago” era difícilmente controlable por la Policía. Organizados en pequeños grupos, se concentraban en las veredas de un lugar convenido y sorprendentemente bajaban a la calle coreando consignas, lanzando piedras o *molotov* e interrumpiendo el tránsito. Con la misma rapidez con la que se habían concentrado, los manifestantes se disolvían para reagruparse en otro punto de la ciudad.

El 13 de junio el gobierno implantó las medidas prontas de seguridad. El 24 de junio por decreto del Poder Ejecutivo fueron militarizados unos 5 mil funcionarios de la banca estatal, pertenecientes al Banco Central y al Banco República. Contra ellos rigieron desde entonces las disposiciones disciplinarias de la Ley Orgánica militar. La no concurrencia al trabajo, por ejemplo, fue considerada deserción. El 28 de junio Pacheco decretó la congelación de precios y salarios, con el objetivo de contener la espiral inflacionaria (que entre junio de 1967 y junio de 1968 había alcanzado el 183% de incremento en los precios de artículos de consumo).<sup>18</sup>

El 1º de julio otro decreto del gobierno extendió la militarización a los trabajadores de Usinas y Teléfonos del Estado (UTE), a la empresa estatal de combustibles ANCAP (con respectivamente 15 mil y 11 mil trabajadores), a las Obras Sanitarias del

<sup>17</sup> Jorge Landinelli. *1968...*, Op Cit., páginas 30-33. Sobre la movilización estudiantil, su organización, objetivos, modalidades de lucha, tendencias ideológico-políticas, véanse: Carlos Bañales y Enrique Jara. *La rebelión estudiantil*; Montevideo, Arca, 1968, página 63-109. Gonzalo Varela Petito. *El movimiento estudiantil de 1968. El IAVA, una recapitulación personal*;

Montevideo, Trilce, 2002. Vania Markarian. *El 68 uruguayo. El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat*; Bernal, Editorial Universidad Nacional de Quilmes, 2012, páginas 13-98.

<sup>18</sup> Henry Finch. *Historia económica...*, Op Cit., página 48 y Benjamín Nahum et al. *El fin...*, Op Cit., página 139.

Estado (OSE) y a Telecomunicaciones. Centenares de activistas sindicales y huelguistas de las empresas militarizadas fueron arrestados e internados en unidades militares. Muchos sufrieron vejámenes, destituciones y despidos. El entonces dirigente sindical Hugo Cores estimaba que la militarización de 1968 afectó a unos 37 mil trabajadores, y que más allá de la intimidación, generó en amplios sectores sociales sentimientos de indignación y rebeldía.<sup>19</sup> Los catedráticos de derecho público y derecho constitucional, Horacio Cassinelli Muñoz y Aníbal Barbagelata, elaboraron un informe en el que coincidían en considerar absolutamente inconstitucional la militarización de trabajadores.<sup>20</sup>

Los trabajadores del sector privado también se movilaron intensamente en Montevideo e interior del país. Realizaron paros o huelgas los gremios de frigoríficos, banca privada, bebida, construcción, industria química, metalúrgicos, textiles, gráficos, periodistas, profesores y maestros, actores de teatro, artistas plásticos y otros trabajadores de la cultura.<sup>21</sup>

A comienzos de julio el Ministerio del Interior informó al Parlamento que los trabajadores y manifestantes detenidos ya eran centenares en Montevideo, Maldonado, Lavalleja, Florida, Paysandú, Río Negro, Rocha y Artigas. Se les recluía en cuarteles o dependencias del Ejército. En el interior del país los detenidos eran todos hombres, en

Montevideo muchas mujeres. El 2 de julio la Marina llevó a los obreros de ANCAP detenidos a un cuartel, los rapó y devolvió al trabajo.<sup>22</sup>

Las tensiones sociales alcanzaron su ápice en agosto y septiembre de 1968. La exasperación de estudiantes y asalariados se manifestó en el creciente recurso a paros, huelgas, ocupaciones y movilizaciones callejeras, en un esfuerzo tumultuoso por obtener justicia distributiva y libertad, frente a las medidas de compresión de los salarios y limitación de las libertades. Las movilizaciones representaron la irrupción de los movimientos estudiantil y sindical en la escena política, con una intensidad desconocida en el pasado. En el correr del año más de 600 huelgas y paros revelaron la dimensión de la protesta social.

Al cabo de poco tiempo, las luchas populares trascendieron los objetivos de defensa de sus intereses inmediatos. Los movimientos sindical y estudiantil tomaron las calles para expresar su apoyo a los gremios en conflicto y su rechazo a las MPS, la congelación de salarios, la militarización de trabajadores, la brutal violencia policial, los ataques del gobierno a las autoridades universitarias y el allanamiento sin orden judicial de la Universidad.

<sup>19</sup> Hugo Cores. *El 68 uruguayo...*, Op Cit., página 147.

<sup>20</sup> El informe completo en *Diario de Sesiones de la Asamblea General* (en adelante DSAG), Tomo 49,

Montevideo, Poder Legislativo. Sesiones del 13/12/1967 al 26/9/1968, páginas 462-463.

<sup>21</sup> Jorge Landinelli. *1968...*, Op Cit., página 103.

<sup>22</sup> DSAG, Tomo 49..., Op Cit. Sesión del 12/7/1968.

## Un Parlamento en crisis

Aunque condenando la violencia desplegada por los manifestantes, en el Parlamento una minoría de legisladores manifestó indignación y sorpresa ante la violencia de las fuerzas policiales. Fue en junio de 1968 cuando comenzó a perfilarse en sectores de los partidos Blanco y Colorado una firme oposición a la política de Pacheco, que se manifestó con ímpetu en los años sucesivos. Los primeros cuestionamientos provinieron de los grupos colorados liderados por Zelmar Michelini, Amílcar Vasconcellos, Manuel Flores Mora y Alba Roballo; en el partido Nacional, de los sectores de Carlos Julio Pereira, Mario Heber, Héctor Gutiérrez Ruiz y a partir de 1969, de Wilson Ferreira Aldunate. Junto a ellos las exiguas fuerzas de la izquierda, representadas por los partidos Comunista, Socialista y Demócrata Cristiano.<sup>23</sup>

La Asamblea General pudo reunirse recién el 25 de junio para tratar el problema de las MPS. En un aula semivacía se leyeron las comunicaciones del Poder Ejecutivo con la nómina de presos de los últimos días.<sup>24</sup> Los legisladores presentes expresaron preocupación ante la desmesurada ofensiva del gobierno contra estudiantes y trabajadores. El diputado del partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz se preguntaba:

“¿Quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde surgieron estos hombres jóvenes que andan por las calles gritando? ¿Son hijos de algún satélite extraño o son los hijos de este país, hijos nuestros? ¿No constituyen la generación que vendrá detrás nuestro? ¿Son hombres jóvenes que están cometiendo desmanes? Sí, señor presidente, pero en honor a la verdad cronológica de los hechos es bueno aclarar y puntualizar que se incendiaron autos después que hubo balazos y en la opción entre el valor de un auto y el de una vida universitaria, nosotros no tenemos dudas. [...] Es un hombre joven que está gritando en la calle en forma desordenada y anárquica, pero está exigiendo [...] El hombre de nuestra Universidad del Trabajo o los jóvenes de nuestros liceos y preparatorios, no está pidiendo otra cosa que no sea que el gobierno y los hombres que mandan sepan mostrarles que hay un Poder Ejecutivo que está abriendo horizontes nuevos para el país. Piden, en definitiva, una existencia más fértil, más justa y más fecunda [...]”.<sup>25</sup>

Para el nacionalista Francisco Rodríguez Camusso la movilización sindical era fruto de la “conmoción, agitación y angustia colectiva” generada por la grave situación económica. “Hay núcleos de trabajadores

<sup>23</sup> En las elecciones políticas de 1966 el partido Comunista con sus aliados del FIDEL había obtenido el 5,7% de los sufragios, el Socialista el 0,9%, el PDC el 3%. Benjamín Nahum et al. *El fin...*, op cit, págs. 50, 64-66. Carlos Real de Azúa. *Partidos, política y poder en el Uruguay*; Montevideo, 1988, Universidad de la República, n.51 página 145.

<sup>24</sup> Los días 25 y 26/7/1968 no hubo *quorum* en la Asamblea General. Con todo, el reglamento estipulaba que luego de la tercera citación del mismo día, aun sin *quorum* los presentes podían iniciar el debate.

<sup>25</sup> DSAG. Tomo 49, sesión del 25-26-27/6/1968.

que ganan sueldos de 8, 9 o 10 mil pesos”, denunciaba.<sup>26</sup> Pacheco había formado un consejo de ministros con hombres sin trayectoria política, representantes de sectores económicamente poderosos: ganadería, industria, grandes bancos, grupos sociales que se habían beneficiado con el empobrecimiento de la población. El gabinete, en suma, era “un equipo económico y no un consejo de ministros”. Tanto Gestido como Pacheco habían ido dejando por el camino las corrientes políticas que permitieron al partido Colorado ganar las elecciones de 1966, para llevar al gobierno personajes cuyas ideas y orientaciones no tenían el consenso de las urnas.<sup>27</sup>

En efecto, la puesta en marcha de la política fondomonetarista y el ataque a las libertades constitucionales habían ido expulsando del gabinete a los políticos profesionales, reemplazados por empresarios, médicos, ingenieros y otros técnicos sin trayectoria política ni condicionamientos de orden electoral.<sup>28</sup>

En opinión del colorado Zelmar Michelini la razón de fondo de la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el movimiento sindical era una sola: el desprecio demostrado por los pasados gobiernos hacia los sindicatos. La exclusión de los trabajadores y empleados sindicalizados de las grandes decisiones del

Estado era de larga data. No obstante, “cuando se toman decisiones que interesan a todos los uruguayos tienen asiento y son consultadas las gremiales empresariales”, desde la Asociación de Bancos hasta las cámaras de Comercio, Industria, Mercantil o de Productos del país. Las gremiales de trabajadores, “con el pretexto de que sus dirigentes son todos comunistas, han sido permanentemente excluidas en los últimos 20 años de todas las decisiones”. Los gremios de la enseñanza, por ejemplo, habían sido deliberadamente radiados por los gobiernos colorados y blancos de la discusión sobre la reforma educativa, cuestión relevante que concernía al entero país. Era evidente el desinterés demostrado por los políticos hacia el mundo del trabajo:

“Muchos gremios son dirigidos por comunistas porque hay ceguera y desconocimiento total de los dirigentes políticos en materia de tratar los problemas sindicales, hablar con sus dirigentes y tener acceso directo a las causas que originan tales problemas [...]. Los trabajadores sienten que son relegados y por eso recurren a los dirigentes comunistas. Los aumentos de salarios y otras mejoras sociales son logradas muchas veces, a pesar de ser votadas también por blancos y colorados -que integran la inmensa

<sup>26</sup> Señalaba Rodríguez Camusso que el precio oficial del dólar en esos momentos era de 250 pesos y en el mercado paralelo de 300 pesos. Un sueldo de 8 mil pesos equivalía a U\$S 32 (o U\$S 26,6) mensuales.

<sup>27</sup> DSAG, Tomo 49... op cit. Sesión del 25-26-27/6/1968.

<sup>28</sup> Fueron ministros de Pacheco, entre otros, Jorge Peirano Facio (empresario banquero), Carlos Frick

Davies (empresario ganadero), José Serrato (industrial), Walter Pintos Risso (empresario de la construcción), Eduardo Jiménez de Aréchaga (abogado, en 1967 directivo de Pepsi Cola uruguayo). Carlos Real de Azúa. *Partidos...*, Op Cit., página 148.

mayoría del Parlamento- por el trabajo tenaz, persistente, duro, firme, sin debilidades, de los dirigentes comunistas”.

Los episodios de violencia en las protestas sociales no eran nuevos en Uruguay. Diez años atrás, durante la huelga estudiantil de 1958,

“También se rompieron vidrieras y apedrearon policías. Se conmocionó la ciudad. Originó desfiles de 70 mil, 80 mil o 100 mil personas delante del Palacio Legislativo. Mientras estábamos aquí considerando la Ley Orgánica universitaria, fuimos no apedreados, pero sí salvados muchos diputados, y desde las barras nos tiraron vintenes y rompieron algunos parabrisas en la calle”.

Gobernaba entonces el partido Colorado, continuó Michelini. El actual ministro del Interior, Eduardo Jiménez de Aréchaga, pactaba por los estudiantes como representante del centro estudiantil de la facultad de Derecho y del Rectorado. Pese a la violencia desatada y a que existía “temor de salir a la calle”, no se implantaron las medidas de seguridad y ningún dirigente sindical fue detenido, como lo estaba en esos momentos el líder de los textiles Héctor Rodríguez. Las fuerzas policiales patrullaban normalmente la ciudad. “Y tercera precisión”, finalizó Michelini “¡Este es un debate de viejos! [...] ¡Nuestros hijos no nos comprenderían si nos oyeran! [...] No se crea que hay otra cosa que un tremendo y

profundo descontento que existe en las masas juveniles con respecto a lo que el país no puede dar”.<sup>29</sup>

El diputado Ariel Collazo, del Movimiento Revolucionario Oriental, consideraba que el gobierno no se situaba, como era su deber, por encima de los conflictos laborales. Las reivindicaciones sindicales eran justas: el sueldo de un empleado bancario al ingresar oscilaba entre 10 mil y 14 mil pesos; el de un policía, entre 6 mil y 8 mil. A la Universidad se le debían entre 500 y 100 millones de pesos; también se restringía el presupuesto de Primaria y Secundaria. Las perspectivas laborales de los jóvenes eran cada vez más oscuras.

La violencia aplicada por las fuerzas policiales contra estudiantes y obreros, según Collazo, se explicaba por el adoctrinamiento anticomunista radical que venía recibiendo la Policía desde tiempo atrás y que tendía a generar sentimientos de odio hacia un grupo de ciudadanos. No se les consideraba compatriotas sino enemigos hacia los cuales debía sentirse aversión. Por esa razón en los últimos días había ocurrido que los policías rompieran las costillas o pisaran los dedos de los estudiantes detenidos:

“Lo que sucede es que siguiendo orientaciones que vienen del Norte, a algunos sectores de la Policía se los educa en el anticomunismo. Tenemos datos concretos de que en la Guardia Metropolitana de nuestro país se dictan clases para enseñar a la gente

<sup>29</sup> DSAG, Tomo 49... op cit. Sesión del 25-26-27/6/1968.

a odiar el comunismo, no explicándoles lo que es [...]. Se les enseña irracionalmente, se les crea odio, como el que creó Hitler contra los judíos, como el odio que hay en la sociedad norteamericana contra los negros, como el odio irracional del fascismo. Ese tipo de enseñanza viene de lejos, porque eso, en nuestro país, hace muchos años que no se hacía”.<sup>30</sup>

A partir de junio de 1968, ante la gravedad de la situación, los legisladores de la oposición convocaron repetidamente a la Asamblea General. Se presentaba un número tan exiguo de parlamentarios que salvo contadas ocasiones no se alcanzaba el *quorum*. El senador comunista Enrique Rodríguez observaba que casi todos los legisladores del partido Colorado y una parte del Nacional habían resuelto en forma ostensible boicotear la Asamblea. El nacionalista Alberto Gutiérrez Cirimello advertía el 12 de julio: “Si no compelemos a nuestros compañeros a que reaccionen nos encontraremos con un caso único en la historia. Éste será un Parlamento que ha querido morir. Y así se irá, sin pena ni gloria”. El día anterior, informó Gutiérrez Cirimello, se habían entrevistado con Pacheco varios legisladores del partido Nacional: “¿Hasta qué nivel, hasta qué profundidad, piensa ir usted en la escalada?”, preguntaron. “Porque

vemos que el caos es cada vez mayor. Porque si esta escalada sigue profundizándose, la salida es muy peligrosa y hasta puede correr sangre”. Pacheco respondió: “Si corre sangre, no seré yo el culpable”.<sup>31</sup>

## Instrucción y pertrechos

Al intensificarse la protesta social en Uruguay, el Programa de Seguridad Pública de la AID proporcionó el adiestramiento y los insumos necesarios para garantizar la eficacia policial en la ofensiva contra los movimientos sociales.

En 1968 el equipo del PSP estaba integrado por cuatro instructores. Tres habían sido policías en Estados Unidos: el jefe Adolph Saenz, el responsable de entrenamiento Cesar Bernal y Julian Lindenauer, llegado a Montevideo en septiembre de ese año. El cuarto, William Cantrell, consejero de Inteligencia, desde 1961 trabajaba para el PSP. Aunque adscripto como sus camaradas a la AID, en realidad era funcionario de la CIA.<sup>32</sup>

El trabajo de los cuatro instructores se desarrollaba en sordina, alejado de la visibilidad de la política y los medios de comunicación. El Parlamento no controlaba sus actividades y el Ejecutivo evitaba

<sup>30</sup> Idem.

<sup>31</sup> DSAG, Tomo 49..., Op Cit. Sesión del 12/7/1968.

<sup>32</sup> Philip Agee informa que Cantrell perteneció al Servicio Secreto y que al incorporarse a la CIA cumplió funciones en la División Lejano Oriente. *Diario de la CIA...*, Op Cit., página 521. Un documento de la OPS indica que Cantrell había sido funcionario del Departamento del Ejército y al dejar Montevideo fue reintegrado al mismo. Departamento de Estado a

Embajada de EEUU en Montevideo, State 41580, 20/3/1970, “William A Cantrell, 21/257/71”, NARA, RG286, OPS, box 110. Según consigna otra fuente, Cantrell (nacido en Oklahoma en 1927) sirvió en el ejército (1945-1947, 1950-1953), pasó luego al Departamento del Tesoro (1954-61) y más tarde al PSP. “US Agents of Repression”, en *NACLA's Latin America and Empire Report*, Volume 6, July 1972, página 23.

informar al respecto. Pese a su opacidad, la labor de los estadounidenses se desplegaba en coordinación con los más altos niveles del gobierno.

El PSP en 1968 hizo llegar a Uruguay un alud de suministros, enviados en ocasiones por vía aérea desde Estados Unidos o Panamá. Junto al armamento tradicional entregado a la Policía en los años precedentes, llegaron ingentes partidas de equipos y municiones químicas para el control de tumultos: escopetas y revólveres de gas Federal, miles de granadas, proyectiles y cartuchos de gas lacrimógeno CN y CS destinados a la Guardia Metropolitana, quintales de gas lacrimógeno en bidones, dispensadores en aerosol del mismo gas, granadas y proyectiles de gas de dispersión detonante.<sup>33</sup> Cientos de manifestantes resultaron heridos, algunos de gravedad, por el impacto directo de estos elementos.

Los instructores del PSP incentivaron a partir de junio de 1968 la producción de cachiporras de madera y solicitaron a Washington más vehículos para el patrullaje y la disolución de manifestaciones. Proveyeron cascos, máscaras, cámaras fotográficas, teletipos, equipos de investigación y laboratorio, radiotransmisores y otros insumos para la actividad policial. El equipamiento de la Policía uruguaya, en 1968 y en los años

sucesivos, provino abrumadoramente de los fondos del programa de la AID.<sup>34</sup>

Por otra parte, Saenz y Bernal dirigieron el adiestramiento contrainsurgente en Montevideo e interior del país. En 1968 seleccionaron a los policías más destacados –como lo venían haciendo desde 1965– y los enviaron a perfeccionarse en la IPA y otros centros de instrucción en Estados Unidos. Algunos de estos cursos, a otro nivel, eran replicados en Uruguay por los estadounidenses o por los becados a la IPA a su regreso. Junto a los contenidos técnicos incluían un fuerte adoctrinamiento anticomunista.

“El impacto de nuestro programa”, concluían con indisimulado orgullo en septiembre de 1968, “es verdaderamente evidente. [...] El personal de la AID constituye además un favorable factor de apoyo moral para la Policía en estos momentos”. Gracias a su asistencia, afirmaban, “desde enero a septiembre de 1968, 224 desórdenes de significativas proporciones fueron exitosamente controlados por la Policía. Estamos alentándola para que desarrolle nuevos planes para cubrir las contingencias que puedan ocurrir en los próximos meses”.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> AID/OPS, “US Public Safety Project. Fiscal Years 1964-1973 Uruguay”, NARA, RG286, OPS, box 116.

<sup>34</sup> Una parte menor de los suministros era adquirida por Uruguay. En noviembre de 1968, por ejemplo, la Policía de Montevideo aportó U\$S 28 mil para la compra de vehículos, agentes químicos y repuestos de radio y automóviles. El mismo mes el subsecretario Suárez informó a Saenz que su Ministerio tenía otros U\$S 60 mil inmediatamente disponibles para la compra de vehículos

en EEUU. El costo unitario en 1969-1970 de un Ford Falcon era de U\$S 2.767, de un Chevy Nova U\$S 2.660. AID Montevideo, “Public Safety Monthly Report, November 1968”. AID/OPS, “US Public Safety Project. Fiscal Years 1964-1973 Uruguay”, NARA, RG286, OPS, box 110, box 116.

<sup>35</sup> AID Montevideo, “Public Safety Monthly Report, September 1968”, NARA, RG286, OPS, box 110.

## Orientación e influencia

Los instructores policiales no se limitaron a proporcionar adiestramiento y pertrechos, sino que ejercieron una permanente orientación de las actividades policiales. En 1968 se reunían habitualmente con los jefes del Ministerio del Interior y de la Jefatura de Montevideo para sopesar los aciertos y errores de la campaña represiva y disponer en conjunto las tácticas a seguir.

El contacto entre uruguayos y estadounidenses era cotidiano porque el equipo del Programa de Seguridad Pública disponía de una oficina ubicada en el primer piso de San José y Yí. En el mismo edificio funcionaba el centro de radiocomunicaciones policiales, organizado, equipado y supervisado por técnicos del PSP que viajaban periódicamente a Uruguay. Entre otras funciones, en el centro se interceptaban teléfonos, a pedido de los funcionarios de la CIA que con distintas coberturas oficiales visitaban frecuentemente la Jefatura.<sup>36</sup>

Podría pensarse que los instructores del PSP y el personal de la embajada de Estados Unidos impusieran por la fuerza sus criterios y políticas a un conjunto de jefes locales que rechazaban su injerencia. En realidad, eran los gobernantes uruguayos, los sucesivos ministros del Interior y los jefes policiales quienes solicitaban apoyo y financiación, equipamiento y orientaciones, becas y adiestramiento, quienes agradecían

y volvían a agradecer a los funcionarios estadounidenses.

En el mes de julio el mismo presidente Pacheco telefoneó a la embajada para agradecer a los diplomáticos e instructores del PSP la eficacia demostrada en junio por la Policía.<sup>37</sup> Evidentemente el primer mandatario no atribuía ninguna importancia al hecho de que varios jóvenes hubieran resultado heridos de bala y otros centenares lesionados por los apaleos brutales de las guardias Metropolitana y Republicana, adiestradas, estimuladas y equipadas por el PSP.

A ciertas reuniones de coordinación con Saenz y sus hombres asistieron el ministro de Defensa de la época, general Antonio Francese, y los comandantes de las tres armas. Entre enero y mayo los instructores se reunieron frecuentemente con el ministro del Interior, Augusto Legnani, el subsecretario Alejandro Rovira, el jefe de Policía de Montevideo, Raúl Barlocco, el director de Seguridad, Emilio Guerra, el jefe de la Guardia Metropolitana, Alfredo Rivero, el de la Guardia Republicana, Ángel Barrios (todos ellos oficiales militares en situación de retiro), y el director de Inteligencia, Antonio Pérez Castagnet.<sup>38</sup>

Frente al aumento de la agitación social, en mayo de 1968 se produjeron oportunos cambios en las autoridades policiales y del Ministerio del Interior. Por discrepancias internas renunciaron el ministro Legnani y

<sup>36</sup> Philip Agee. *Diario de la CIA...*, Op Cit., páginas 378-380.

<sup>37</sup> AID Montevideo, "Public Safety Monthly Report, July 1968", NARA, RG286, OPS, box 110.

<sup>38</sup> AID Montevideo, "Public Safety Monthly Report" de enero, febrero, marzo y abril de 1968, NARA, RG286, OPS, box 110.

el subsecretario Rovira. El primero fue reemplazado por el abogado Eduardo Jiménez de Aréchaga; el segundo por Jorge Suárez, marino retirado con un nutrido currículum de funciones oficiales cumplidas en Estados Unidos.<sup>39</sup> Al mismo tiempo, en la Jefatura de Policía de Montevideo Raúl Barlocco fue sustituido por el coronel Alberto Aguirre Gestido. El subjefe Ramiro Chávez dejó su cargo a Heleazar Agosto. Como jefe del estado mayor policial fue designado el coronel Romeo Zina Fernández, ex miembro del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID).

El 24 de mayo, apenas asumieron sus cargos, Jiménez de Aréchaga y Suárez se reunieron por dos horas con Bernal y Cantrell para discutir los próximos pasos del proyecto de seguridad pública, asegurándoles su fervoroso sostén.

El mismo día Saenz y sus hombres se reunieron con los nuevos jefes policiales, quienes reafirmaron su incondicional apoyo al programa. Aguirre Gestido expresó su total confianza en la capacidad de los instructores estadounidenses; esperaba le aconsejaran cómo orientar a la Jefatura de Policía y resolver sus problemas. Aseguró, además, que la Jefatura proseguiría “su estrecha colaboración con la Embajada”.<sup>40</sup>

El 29 de mayo los instructores se reunieron con los jefes y subjefes de las guardias

Metropolitana y Republicana para discutir la celeridad de esas unidades en la disolución de movilizaciones. Inspeccionaron las existencias de municiones químicas y las estimaron suficientes para neutralizar los disturbios previstos para los próximos seis o nueve meses. La Republicana se había preparado para realizar patrullajes a pie. Contaba con 435 efectivos, de los cuales entre 150 y 175 montaban caballos. Con el apoyo de Saenz y Bernal, los demás fueron organizados, entrenados y armados con cachiporras.<sup>41</sup>

Reuniones conjuntas de alto nivel como las mantenidas en mayo se repitieron hasta fin de año. A partir de junio la intensificación de la protesta social obligó a revisar las estimaciones precedentes. En los balances mensuales enviados a Washington, los instructores del PSP informaban haber trabajado con los jefes policiales para planificar medidas represivas, coordinar operaciones y comunicaciones, redistribuir equipos y vehículos y ofrecer sugerencias y asistencia.

### **Inteligencia para la persecución política**

La Inteligencia fue un capítulo esencial del proyecto estadounidense de reforma de la Policía. En 1965 se consideraba que los métodos en esa área eran toscos y

<sup>39</sup> El currículum de Suárez hasta 1971 en Jorge Pacheco y José Mora Otero, “Mensaje a la Cámara de Senadores” (solicitud de acreditación de Suárez como embajador extraordinario y plenipotenciario de Uruguay en Panamá), Montevideo, 25/5/71, en Archivo Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) de Uruguay, Legajo N° 56, “Jorge Carlos Suárez Carballo”.

<sup>40</sup> AID Montevideo, “Public Safety Monthly Report, May 1968”, NARA, RG286, OPS, box 110. Embajada de EEUU a Departamento de Estado, “New Montevideo Police Chief”, 21/5/1968, NARA, RG59, CFPP, PD 1967-1969, box 2581.

<sup>41</sup> AID Montevideo, “Public Safety Monthly Report, May 1968”, NARA, RG286, OPS, box 110.

elementales. El núcleo de la CIA que operaba en Uruguay impulsó en 1967 la creación de una nueva unidad, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), que absorbió el antiguo Departamento de Inteligencia y Enlace.<sup>42</sup> Aunque es poco lo que se sabe al respecto, varios testimonios directos han afirmado que la CIA supervisó, financió y adiestró a los policías de la DNII a través de sus funcionarios William Cantrell y Juan Noriega. Cantrell se fue de Uruguay en marzo de 1970; Noriega (que operaba con cobertura diplomática) en noviembre de 1969. Con ellos trabajaron varios agentes uruguayos remunerados por la CIA, como el inspector Pírez Castagnet, el comisario Alejandro Otero y el subcomisario Pablo Fontana.<sup>43</sup>

En 1968 la Inteligencia policial colaboró con la campaña represiva para atender los problemas planteados por la movilización social, fichar a los manifestantes y huelguistas, vigilar a sus dirigentes y realizar arrestos. La DNII siguió fortaleciéndose con la asignación mes a mes de nuevos policías. Cantrell dirigió los cursos de instrucción para el personal seleccionado con la colaboración de uruguayos graduados en la IPA. También supervisó la renovación del equipamiento de la DNII y las reformas edilicias de su nueva sede, ubicada en la avenida 18 de Julio casi Juan Paullier, en

dependencias cedidas por la Seccional 9<sup>a</sup> de Policía. En noviembre informó a Washington que el archivo de la DNII estaba progresando y la sección fotográfica se había enriquecido en los últimos cuatro meses con 9.870 fotografías.<sup>44</sup>

En los años siguientes, hasta el término de la dictadura, la DNII fue conocida por las torturas que su personal perpetraba contra los detenidos políticos. La modernización en equipamiento e instrucción que hasta 1974 le brindó el PSP no la convirtió en un competente servicio de inteligencia sino en el instrumento idóneo para la vigilancia y el fichaje político-ideológico de los ciudadanos, con finalidades de control y persecución política.<sup>45</sup>

### Armas contra piedras

Una semana después de la muerte de Líber Arce, el 22 de agosto, Pacheco se reunió con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, John L Topping, y le solicitó más armamento y municiones. “Como siempre”, informó este último a Washington, “aparecía distendido, seguro y determinado”. El presidente explicó que la Policía y las Fuerzas Armadas necesitaban asistencia en armas ligeras, transportes, comunicación y municiones. Topping le

<sup>42</sup> Philip Agee, *Diario de la CIA...*, Op Cit., páginas 521, 536, 537, 660 y 638. AID Montevideo, “Terrorist Activity in Uruguay. December 1966 and January 1967”, 10/2/1967, NARA, RG286, OPS, box 114.

<sup>43</sup> Manuel Hevia Cosculluela. *Pasaporte 11333. Ocho años con la CIA*; La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1978, páginas 225-242. Alejandro Otero, entrevistas de la autora, Montevideo, 2002 y 2003. Philip Agee, *Diario de la CIA...*, Op Cit., páginas 668 y 680.

<sup>44</sup> Informaciones extraídas de los informes mensuales AID Montevideo, “Public Safety Monthly Report”, enero a diciembre de 1968. NARA, RG286, OPS, box 110.

<sup>45</sup> Véase Álvaro Rico (coord.). “Contexto represivo. Testimonios” en *Investigación histórica sobre Detenidos Desaparecidos, Tomo I*; Montevideo, Presidencia de la República, IMPO, 2007.

preguntó qué entendía por armas ligeras y el presidente dijo “que no pensaba en armas automáticas, sino en armamento liviano y más eficiente”. El diplomático prometió transmitir los requerimientos y sugirió la conveniencia de que el Ejército sustituyera sus obsoletos tanques por vehículos blindados para el transporte de efectivos, idea que entusiasmó al presidente.

A continuación, “hablando más en confianza”, Pacheco opinó que las Fuerzas Armadas no habían respondido adecuadamente a la reciente crisis. “Dijo que están apegadas a los conceptos militares clásicos, mientras que él sentía que deberían estar fortaleciendo la moderna función de seguridad interna. Como resultado, las Fuerzas Armadas no habían respondido en la forma que él esperaba a los recientes disturbios, desórdenes y acciones terroristas”. Aunque sentía que en este plano la situación “mejoraría progresivamente”, era necesario brindarles “alguna reeducación”.<sup>46</sup>

Respaldado por esta virtual autorización presidencial y constatando la intensidad, frecuencia y masividad de las movilizaciones populares, Saenz solicitó urgentemente a Washington le enviara más armamento antidisturbios. Por vía aérea llegaron a Montevideo 50 escopetas antimotines, 42 de las cuales fueron entregadas a la Guardia Metropolitana. Bernal adiestró a los policías en su uso y el 18 de septiembre fueron estrenadas en las inmediaciones del Palacio

Legislativo, hiriendo a varios estudiantes. El 20 de septiembre la Metropolitana volvió a emplearlas para disparar contra una manifestación que se desarrollaba frente a la facultad de Derecho, dando muerte a los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos. La orden de disparar la dio el jefe de la Metropolitana, Alfredo Rivero, que comandaba los efectivos policiales y había sido instruido en control de disturbios por el PSP. En el informe mensual enviado a Washington, los instructores aseguraron falsamente que los primeros disparos habían partido de la manifestación y que Rivero había respondido para defender la vida de sus subordinados. Relativizaron las muertes diciendo que las víctimas eran miembros de la Juventud Comunista, y añadieron –en una frase cancelada con un trazo de tinta– que uno de los fallecidos había frecuentado un curso de adiestramiento en Rusia.<sup>47</sup>

En el Parlamento se inquirió, infructuosamente, sobre el origen de las nuevas armas. El ministro de Cultura Federico García Capurro el 22 de septiembre negó terminantemente que la Metropolitana hubiera usado armas de ese tipo, con el argumento de que no las tenía en dotación. En octubre de 1968, en el transcurso de una interpelación parlamentaria, el ministro Jiménez de Aréchaga debió admitir su uso, pero aseguró que habían sido compradas por el anterior gobierno del partido Nacional. De esta forma el Poder Ejecutivo mentía al Poder Legislativo, inaugurando en

<sup>46</sup> Embajada de EEUU a Secretario de Estado, “Conversation with President”, 22/8/1968, Montevideo 3714, NARA, RG59, CFPP, PD 1967-1969, box 2581.

<sup>47</sup> AID Montevideo, “Public Safety Monthly Report, August 1968”, “Public Safety Monthly Report

September 1968”, en NARA, RG286, OPS, box 110. El número de armas, la fecha de llegada y su distribución en “US Public Safety Project. Fiscal Years 1964-1973 Uruguay”, en Idem, box 116.

Uruguay la práctica de la negación de los crímenes de Estado por sus ejecutores, cómplices y mandantes. Jiménez de Aréchaga fue desmentido en el Parlamento por el senador Felipe Gil, ministro del Interior del anterior gobierno blanco.<sup>48</sup> Pero la verdad sobre el origen de este armamento no llegó a conocerse hasta que los documentos estadounidenses que aquí se citan fueron desclasificados.

El 26 de junio Jiménez de Aréchaga había intentado justificar, en la Asamblea General, las vigentes medidas de seguridad, comparándolas con las implantadas en Uruguay en 1904 por el presidente José Batlle y Ordóñez. El senador Enrique Rodríguez lo interrumpió: “Había guerra civil entonces”. El ministro respondió tajante: “Y ahora también”.<sup>49</sup>

A fines de 1968 Jiménez de Aréchaga renunció a su cargo ministerial. Tiempo después fue designado para integrar la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El periódico comunista *El Popular* observó que había obtenido “La máxima distinción a la que un jurista puede aspirar. Máxima paradoja: el hombre que dejó su Ministerio manchado con la sangre de tres jóvenes asesinados”.<sup>50</sup>

El subsecretario de Interior Jorge Suárez en 1969 se incorporó al Ministerio de

Relaciones Exteriores como ministro plenipotenciario del servicio exterior de la República y fue asignado a la embajada de Uruguay en Washington.<sup>51</sup> El coronel Alfredo Rivero fue promovido a jefe de Policía de Montevideo. El 18 de marzo de 1971 partió hacia Washington al obtener otra promoción, la de asesor de la delegación uruguaya a la Junta Interamericana de Defensa, cargo que desempeñó hasta 1973.<sup>52</sup>

### Militares en la represión interna

La coordinación militar y policial, el establecimiento de vínculos entre Fuerzas Armadas y Policía para la represión conjunta del presunto avance comunista, fue desde 1965 uno de los principales objetivos del PSP.

Los cuatro equipos del programa que actuaron en Uruguay trabajaron en coordinación con los servicios de inteligencia uruguayos y con el Grupo Militar de la embajada de Estados Unidos, comandado a partir de 1967 por el coronel Lorenzo Caliendo. Por su cercanía con las Fuerzas Armadas uruguayas, este militar cumplió un destacado papel en el desarrollo de la ofensiva contrainsurgente de los años sucesivos.

<sup>48</sup> Gonzalo Varela Petito. *El movimiento estudiantil...*, Op Cit., páginas 114-115.

<sup>49</sup> DSAG, Tomo 49... op cit. Sesión del 25-26-27/6/1968.

<sup>50</sup> *El Popular*, Montevideo, 29/10/1969, “Los elementos de perturbación los crea el Poder Ejecutivo”.

<sup>51</sup> En septiembre de 1970 y abril de 1971 Suárez fue representante interino de Uruguay ante la OEA, en mayo de 1971 fue designado embajador en Panamá; en

septiembre de 1973 fue destinado en calidad de ministro a la embajada de Uruguay en Madrid (el embajador era Jorge Pacheco). Véase Archivo Administrativo del MRE de Uruguay, Legajo N° 56, “Jorge Carlos Suárez Carballo”.

<sup>52</sup> Embajada de EEUU a Secretario de Estado, “Colonel Alfredo Rivero”, Montevideo 690, 18/3/1971. NARA, RG286, OPS, box 115.

En su campo específico de actividad, los instructores del PSP estimulaban la participación militar en la represión de manifestaciones y disturbios civiles. Teorizaban la necesidad de establecer una “segunda línea de defensa” contra el comunismo: la unión operativa de Policía y Fuerzas Armadas en la lucha contrainsurgente. Los diplomáticos estadounidenses, por su parte, pensaban que el cometido fundamental de las Fuerzas Armadas uruguayas, la defensa del país de una agresión exterior, era “ampliamente teórico”. Convenía entonces dotarlas de armamento, vehículos y adiestramiento para la represión interna.<sup>53</sup>

En un primer momento la mayoría de los militares se mostró impermeable a estas sugerencias, pero muy pronto sus resistencias fueron desapareciendo. El auge de las luchas sociales y el secuestro del director interventor de UTE Ulysses Pereira Reverbel por los tupamaros, en agosto de 1968, fueron hitos significativos en este camino.

Byron Engle, director en Washington de la Oficina de Seguridad Pública de la que dependía el PSP, se congratuló con el equipo de Saenz porque en enero de 1968 había logrado incluir formalmente personal militar en el entrenamiento de la Policía. El hecho era tan significativo que debía ser estimulado: “Es esperanzador –escribía– porque presagia estrechas relaciones de trabajo en el futuro”. Engle quiso saber si los respectivos mandos estaban preparando

algún plan operativo de Policía y Fuerzas Armadas para enfrentar unidos las manifestaciones y otros disturbios civiles.<sup>54</sup>

El entrenamiento conjunto al que se refería Engle había tenido lugar en el departamento de Colonia. Los instructores eran policías uruguayos del Grupo Móvil de entrenamiento, organizado y preparado por los estadounidenses del PSP. Contó con la asistencia técnica de Saenz y Bernal. Cursos similares habían sido impartidos precedentemente en Salto y Canelones.

Las instalaciones y armas fueron proporcionadas por el Regimiento 4º de Infantería, con sede en Colonia. A pedido de sus comandantes participaron diez oficiales del Ejército y la Prefectura Marítima. Saenz hizo notar a Washington que por primera vez policías y militares asistían formalmente juntos a un adiestramiento y que todos los involucrados se mostraron entusiastas con la novedad. Visitaron el curso el jefe de Policía de Montevideo, el subsecretario del Interior Rovira y altos oficiales militares del departamento de Colonia. En esa oportunidad el comandante del Regimiento 4º de Infantería enfatizó en un discurso las responsabilidades de militares y policías en la preservación de la seguridad interna. En los siguientes cursos que los estadounidenses organizaron en el interior del país comenzaron a participar oficiales de las Fuerzas Armadas. En Cerro Largo se efectuó en el cuartel del Regimiento 8º de Caballería, comandado por Walter Mario Francese, hijo del ministro de Defensa. De

<sup>53</sup> Embajada de EEUU en Montevideo a Departamento de Estado, “Review of Uruguayan Internal Security Situation”, secreto, 1/12/1972, en NARA, RG59, Subject Numeric Files 1970-1973, PD, box 2662.

<sup>54</sup> AID Washington a AID Montevideo, “Public Safety Monthly Report, January 1968 Uruguay”, 5/5/1968, en NARA, RG286, OPS, box 110.

los 12 instructores uruguayos, nueve habían sido adiestrados en Estados Unidos con becas del PSP. Asistieron como observadores numerosos oficiales militares; por la embajada norteamericana el primer secretario Nicholas McCausland, por el Ministerio del Interior Enrique Sampognaro y el coronel Wellington Viola. "Excelentes relaciones entablaron policías y militares" escribió Saenz a Washington.<sup>55</sup>

El modelo de curso promovido por el PSP incluía ejercicios con armamento, control de manifestaciones y disturbios, relaciones públicas, mecánica del arresto, operaciones de patrullaje, métodos de instrucción, operaciones de defensa interna y principios rectores de la investigación.<sup>56</sup>

En 1968 los instructores del PSP convocaron reuniones con los altos oficiales policiales y militares y los ministros de Defensa e Interior, con el objetivo de demostrar la importancia de una labor conjunta de militares y policías. Las más significativas tuvieron lugar el 5 de septiembre y el 7 de noviembre. En la primera participaron el embajador de Estados Unidos Robert Sayre y otros miembros del *Country Team* (como el primer secretario John Horton, jefe de la base de la CIA en Uruguay hasta agosto de 1968, cuando fue reemplazado por Richard Sampson)<sup>57</sup>, el coronel Lorenzo Caliendo, los ministros y subsecretarios de Defensa e Interior, los inspectores generales de las tres

armas, el jefe de Policía de Montevideo y los comandantes de las guardias Metropolitana y Republicana.<sup>58</sup>

El 7 de noviembre de 1968 los mandos militares y policiales uruguayos se reunieron con los instructores del PSP, los agregados militares de Estados Unidos y oficiales militares norteamericanos llegados expresamente de Panamá para explicar la conveniencia de las fuerzas conjuntas.

Según se informó en esa reunión, las Fuerzas Armadas uruguayas se encontraban dispuestas a movilizar 5 mil hombres en Montevideo, aunque sólo 200 estaban adiestrados para el control de manifestaciones. Cuatrocientos efectivos de la Armada, con la asistencia de la misión militar de Estados Unidos y el adiestramiento en control de disturbios impartido por Bernal, se estaban preparando "para proteger instalaciones vitales, como ANCAP y UTE".

En el cónclave se propuso la creación de un comando militar y policial radicado en el Ministerio de Defensa que pudiera ser utilizado en situaciones de crisis. Es decir, de insurgencia de masas, pues en 1968 la guerrilla urbana no representaba el principal problema de seguridad para el gobierno uruguayo. "Esta reunión fue altamente exitosa en términos de estimular

<sup>55</sup> AID Montevideo, "Public Safety Monthly Report, November 1968", NARA, RG286, OPS, box 110.

<sup>56</sup> AID Montevideo, "Public Safety Monthly Report, January 1968", NARA, RG286, OPS, box 110.

<sup>57</sup> Sampson fue transferido a Washington poco después de la muerte de Dan Mitrione en 1970. En 1973 se

hallaba en México como jefe de la estación de la CIA en ese país. Philip Agee, *Diario de la CIA...*, Op Cit., página 645.

<sup>58</sup> AID Montevideo, "Public Safety Monthly Report, September 1968", NARA, RG286, box 110.

acciones con el propósito de la defensa interna”, comunicó Saenz a Washington.<sup>59</sup>

### **La persecución antisindical de la Marina**

La carencia de documentación oficial y testimonios de protagonistas impide conocer en detalle la naturaleza del adiestramiento impartido en 1968 y 1969 a centenares de efectivos de la Armada por Cesar Bernal, Lorenzo Caliendo y otros expertos norteamericanos. Con todo, las denuncias presentadas por los trabajadores que fueron víctimas de la violencia militar indican que probablemente ese adiestramiento incluyó tácticas represivas que al ser aplicadas violaban los derechos civiles de los uruguayos.

El tratamiento dado por la Marina a los trabajadores militarizados en 1968 y 1969 plantea interrogantes acerca del tópico recurrente que sostiene la excepcionalidad de las Fuerzas Armadas uruguayas en relación a sus congéneres de América Latina, y distingue para el período 1959-1985 dos fases bien delimitadas. La primera, caracterizada por el apoliticismo, el civismo y la profesionalidad militar; la segunda, iniciada en septiembre de 1971, de involucramiento directo de las Fuerzas Armadas en la esfera política por su participación en la campaña antiguerrillera, que habría conducido en un rápido proceso

y casi por inercia al golpe de Estado y a los 12 años de ejercicio del poder dictatorial.

No obstante, en 1968 y 1969, en el marco de las medidas de seguridad, sectores de la Marina y el Ejército participaron sin rémora alguna en la represión antisindical y anticomunista.<sup>60</sup> Abrieron sus cuarteles para transformarlos en prisiones donde miles de uruguayos que habían realizado paros o huelgas fueron sometidos a condiciones de reclusión degradantes. Muchos sufrieron vejámenes, atropellos y humillaciones. La mayoría de los afectados por la violencia militar fueron hombres, pero también hubo centenares de mujeres detenidas por haber realizado paros o por su condición de activistas gremiales. Algunas con arresto domiciliario y vigilancia policial en la puerta del hogar; otras -incluso embarazadas o ancianas- confinadas en la Escuela Carlos Nery transformada en cárcel. “Pensamos que es la primera vez que [a las mujeres] se las trata de esta manera, y no recordamos en la historia de nuestro país que se las haya tratado así”, observaba Carlos Durán, dirigente del sindicato de UTE, en una denuncia presentada a la Comisión del Senado que investigó entre diciembre de 1969 y junio de 1970 las torturas y malos tratos perpetrados por los cuerpos armados del Estado.

Junto al sindicalista Héctor Dutrénit, Durán narró a la Comisión los vejámenes sufridos por los trabajadores militarizados. En 1968 estuvo preso 25 días en el cuartel aeronaval Capitán Curbelo, de Laguna del Sauce, y

<sup>59</sup> AID Montevideo, “Public Safety Monthly Report, November 1968”, NARA, RG286, OPS, box 110.

<sup>60</sup> El pase a retiro solicitado en noviembre de 1968 por los generales Líber Seregni, comandante de la Región

Militar N°1, y Víctor Licandro, director del Instituto Militar de Estudios Superiores, probablemente estuvo determinado por el repudio a los procedimientos represivos ordenados por el gobierno de Pacheco.

Dutrénit tres meses en el Centro de Instrucción de la Marina. “En 1968 los trabajadores de UTE, por varios miles, fueron a los cuarteles, no a hacer instrucción militar, sino como prisioneros, por término en cada oportunidad de diez días a dos meses”. De los 15 mil funcionarios de UTE, recordaba Durán, unos 5 mil habían sido detenidos. En los cuarteles se les ponía de “plantón” (obligados a permanecer durante horas de pie, sin hablar ni cambiar de posición) desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde.

Un año después, en junio de 1969, al decretar Pacheco la nueva militarización de UTE a causa de una serie de paros e interrupciones en el suministro de energía eléctrica, efectivos de la Marina y de la Guardia Metropolitana se presentaron en la Central Batlle y obligaron a más de 700 trabajadores a disponerse en la rambla frente al Río de la Plata. Debieron permanecer de pie ese día, la noche y el día siguiente hasta las 16 horas. “Hubo personas desvanecidas a las que no se les prestó ayuda, mientras otros detenidos tenían que hacer sus necesidades en el mismo lugar donde estaban y no tuvieron agua ni comida durante mucho tiempo”, relataba Durán.

Simultáneamente fue requerida la captura de los dirigentes sindicales por los medios de comunicación y sus fotografías expuestas en las comisarías. Numerosos dirigentes y activistas fueron despedidos del trabajo. “La verdad es que los que integramos la Mesa directiva de la Agrupación UTE –concluía

Durán– tenemos que saber cuáles son nuestros derechos en este país, si somos o no ciudadanos, y qué alternativa tenemos, de qué manera o en dónde podemos trabajar, si están o no cerradas las puertas en las que golpeamos”.<sup>61</sup>

El obrero de UTE José María Rodríguez describió su peripecia a la Comisión del Senado:

“El 25 de junio de 1969, al terminar la jornada de trabajo, un oficial de la Marina me cita en forma verbal para que concurra al comando ese mismo día a la hora 15. A la hora citada concurrí a dicho comando, instalado en la Central Batlle, junto con otros compañeros”.

Trasladados al Centro de Instrucción de la Marina fueron reclusos en una habitación y obligados a permanecer varias horas de pie mirando la pared.

“En esa pieza permanecimos encerrados tres días. Pero ¡qué tres días! Cuando horas más tarde comenzó el desfile de nuestros compañeros, a quienes bajaron del ómnibus a culatazos y empujones, puestos de plantón con las manos en la nuca en la plaza de armas, con esto cumplían doble objetivo: continuar con la tortura que había comenzado en la Central Batlle y en lo que a nosotros se refiere, presenciar el trato inhumano aplicado a nuestros

<sup>61</sup> Denuncia presentada por Carlos Durán y Héctor Dutrénit a la Comisión Investigadora del Senado, Montevideo, 1970.

compañeros y no poder hacer nada por evitarlo; algunos se desmayaban, eran llevados a la enfermería, reaccionaban y otra vez el plantón. Otros no tenían la suerte de ser llevados a la enfermería, cuando se caían los levantaban a patadas, así durante tres días, el desfile continuo de distintos compañeros, unos que llegaban, otros que eran desde allí trasladados a otros lugares, siempre el mismo trato brutal, inhumano, las amenazas de cosas peores, hasta la solicitud de ir al baño resultaba un suplicio por la tardanza con que lo autorizaban a hacerlo. En todo esto se destacaba el Capitán. Este personaje hubiera hecho gran carrera en el ejército nazi. Una tarde nos metieron en un ómnibus sin decirnos a qué destino: su rumbo, Laguna del Sauce, Base Aeronaval Capitán Curbelo. Un verdadero infierno, un campo de concentración donde no faltaba nada para demostrar lo contrario, hasta perros de raza dóberman especialistas en la caza del hombre había. [...]”.<sup>62</sup>

Así pues, las Fuerzas Armadas iniciaron su participación en la represión interna perpetrando vejámenes contra ciudadanos inocentes. Un presagio de las sistemáticas torturas que comenzaron a aplicar contra guerrilleros o sospechosos de serlo desde noviembre de 1971, dos meses después de asumir la conducción de la campaña

antiguerrillera. Torturas que continuarán aplicando ininterrumpidamente hasta el término de la dictadura militar.<sup>63</sup>

En 1968, por lo tanto, los estadounidenses vieron la oportunidad de concretar uno de sus objetivos fundamentales, ya expresados en 1965: el establecimiento de una coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía para dominar las movilizaciones sociales, consideradas como insurgencia urbana impulsada por fuerzas comunistas o aliadas del comunismo.

#### **Anexo fotográfico: Créditos de las Fotografías - NARA, RG286, OPS, Uruguay.**



ADOLPH SAENZ (SEGUNDO DESDE LA IZQUIERDA) CON EL JEFE DE POLICÍA DE MONTEVIDEO CORONEL ROGELIO UBACH Y OFICIALES DEL CUERPO DE PATRULLA (1966).

<sup>62</sup> Denuncia presentada por José María Rodríguez a la Comisión Investigadora del Senado, Montevideo, 1970.

<sup>63</sup> El último uruguayo muerto en la tortura fue el médico comunista Vladimir Roslik, de 35 años, asesinado en

abril de 1984 en el cuartel del Batallón de Infantería de la ciudad de Fray Bentos.



FRANKLIN STEWART Y ALLEN CLAXTON, DIRECTOR Y VICEDIRECTOR DE LA MISIÓN DE LA AID EN URUGUAY CON EL JEFE DE LA GUARDIA METROPOLITANA, CORONEL ALFREDO RIVERO. (FEBRERO DE 1969)



EL JEFE DE LA GUARDIA REPUBLICANA, CORONEL ÁNGEL BARRIOS, EXPONE A LOS DIPLOMÁTICOS DE ESTADOS UNIDOS LAS CAPACIDADES DE SU UNIDAD, QUE CUENTA DESDE 1965 CON EL APOYO DEL PSP. (FEBRERO DE 1969).



DIPLOMÁTICOS DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS OBSERVAN EL EQUIPAMIENTO ANTIDISTURBIOS SUMINISTRADO A LA GUARDIA METROPOLITANA POR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA AID. (FEBRERO DE 1969).



ARMAS AUTOMÁTICAS SUMINISTRADAS POR EL PSP A LA GUARDIA REPUBLICANA. AL CENTRO, CON LENTES DE SOL, ADOLPH SAENZ. (FEBRERO DE 1969).



ADOLPH SAENZ CON DIPLOMÁTICOS DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA METROPOLITANA. (FEBRERO DE 1969).



ADOLPH SAENZ, LOS HOMBRES DE SU EQUIPO Y FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS OBSERVAN VEHÍCULOS Y ARMAMENTO SUMINISTRADOS POR EL PSP. (FEBRERO DE 1969).



CURSO DE TIRO ORGANIZADO POR EL PSP. POLICÍA DE CANELONES, AGOSTO DE 1967.



UN INSTRUCTOR DEL EQUIPO DE SAENZ EXPLICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS LOS USOS DE LAS NUEVAS CACHIPORRAS DE 26 PULGADAS. (FEBRERO DE 1969).



EL SUBSECRETARIO DE INTERIOR ALEJANDRO ROVIRA (DE CIVIL, A LA IZQUIERDA) JUNTO AL JEFE DE POLICÍA DE COLONIA CORONEL CECILIO GALLARDO (A SU DERECHA, DE CIVIL) Y OFICIALES POLICIALES Y MILITARES VISITAN UN CURSO DE ADIESTRAMIENTO POLICIAL Y MILITAR ORGANIZADO POR EL PSP (FEBRERO DE 1968).



CURSO DE ADIESTRAMIENTO POLICIAL Y MILITAR EN COLONIA, FEBRERO DE 1968. LOS INSTRUCTORES DEL GRUPO MÓVIL DE ADIESTRAMIENTO JUNTO A ADOLPH SAENZ (AL CENTRO, DE CAMISA BLANCA) Y CESAR BERNAL (DETRÁS SUYO, CON SOMBRERO).

## BIBLIOGRAFÍA

- “US Agents of Repression”, en NACLA’s Latin America and Empire Report, Volume 6, Julio 1972.
- Agee, Philip. Diario de la CIA. La Compañía por dentro; Barcelona, Bruguera, 1979.
- Astori, Danilo. Tendencias recientes de la economía uruguaya; Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria-CIEDUR, 1981.
- Bañales, Carlos y Enrique Jara. La rebelión estudiantil; Montevideo, Arca, 1968.
- Cores, Hugo. El 68 uruguayo; Montevideo, Banda Oriental, 1997.
- Ferreira Aldunate, Wilson. Estadista y parlamentario, Tomo 2, Parte 2ª; Montevideo, Cámara de Senadores, 1995.
- Finch, Henry. Historia económica del Uruguay contemporáneo; Montevideo, Banda Oriental, 1980.
- Hevia Cosculluela, Manuel. Pasaporte 11333. Ocho años con la CIA; La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1978.
- Klare, Michael; Nancy Stein. Armas y poder en América Latina; México, Era, 1978.
- Landinelli, Jorge. 1968, la revuelta estudiantil; Montevideo, Universidad de la República-Banda Oriental, 1988.
- Markarian, Vania. El 68 uruguayo. El movimiento estudiantil entre

molotovs y música beat; Bernal, Editorial Universidad Nacional de Quilmes, 2012.

Nahum, Benjamín; Ana Frega, Mónica Maronna, Yvette Trochon. El fin del Uruguay liberal 1959-1973; Montevideo, Banda Oriental, 1994.

Real de Azúa, Carlos. Partidos, política y poder en el Uruguay; Montevideo, Universidad de la República, 1988.

Rico, Álvaro (coord.). Investigación histórica sobre Detenidos Desaparecidos, Tomo I; Montevideo, Presidencia de la República, IMPO, 2007.

Varela Petito, Gonzalo. El movimiento estudiantil de 1968. El IAVA, una recapitulación personal; Montevideo, Trilce, 2002.